

Los Balcanes: modelos para un desorden

Francisco VEIGA

*Profesor titular de Historia Contemporánea,
Universitat Autònoma de Barcelona.
Profesor de la Fundació CIDOB.*

Ante la situación de deterioro en los Balcanes, a todos los niveles, la llamada de la historia más remota parece tan evidente que a veces ha terminado por convertirse en el único argumento explicativo posible para multitud de comentaristas de prensa e incluso analistas más especializados. Aquí y allá han vuelto a aparecer supuestas claves basadas en la herencia del Imperio Austrohúngaro o la del Otomano, los voivodas válicos, la Gran Serbia a la Gran Bulgaria medievales, la batalla de Kosovo o el asesinato de Sarajevo. La tentación es irresistible a la vista del resurgimiento de las banderas tradicionales, los viejos odios, el fatalismo social de siempre, el patriotismo decimonónico, los complots sin principio ni final. Por si faltara algo, los propios balcánicos han sido los primeros en jugar —de forma más acomplexada, es verdad— con los supuestos estigmas de la historia.

En realidad, si se quiere recurrir explícitamente a la historia, no hace falta retroceder más de medio siglo para entender la mayoría de las razones últimas de los conflictos balcánicos más actuales. Desde luego, el periodo de entreguerras es importante, así como las motivaciones que llevaron a cada Estado a la Segunda Guerra Mundial y las cuentas sin saldar que la contienda dejó. Pero más decisivo aún es el verano de 1944, cuando el Ejército soviético comenzó a penetrar en Europa Oriental tras limpiar su propio territorio de las tropas alemanas invasoras.

La visión maniquea que ha explotado la propaganda occidental a lo largo de los años de la guerra fría presuponía que los soviéticos habían previsto al detalle lo que ocurrió en aquellos meses de agosto y septiembre, y en los que vinieron después, hasta que los comunistas se hicieron con el poder definitivamente en los Estados balcánicos. Versiones conspirativas como la del príncipe Mihai Sturdza con respecto a Rumania (Sturdza, 1970) eran extensibles a toda Europa del Este sin distinción. El comunismo soviético, actuando clandestinamente, había echado sus redes en la mitad oriental de Europa durante y antes de la guerra, y después se había instalado en el poder siguiendo un patrón casi científico. Los mismos comunistas del Este, deseosos de glorificar su ascenso al poder, refrendaban estas versiones a través de su propia propaganda, actuando desde las cárceles, infiltrados en los palacios o emboscando en las montañas, habían liberado a las masas proletarias y desencadenado la revolución.

En realidad, hoy se sabe que ni los estrategas ni los líderes políticos soviéticos habían previsto lo que ocurrió en los Balcanes en el verano de 1944. El Ejército Rojo tenía como objetivo principal arremeter a través de Polonia y Hungría hacia el corazón del Reich; su zambullida en los Balcanes fue, en buena medida, producto de la improvisación, ante unos golpes de estado,

en Bucarest y en Sofía, también organizados sobre la marcha (Boll, 1984; Bishop & Crayfield, 1949). A pesar de ello, es curioso observar cómo una supuesta tradición balcánica de política conspirativa ha pervivido hasta nuestros días a través de imágenes como las del atentado de Sarajevo en 1914, la «quinta columna nazi» de los años treinta, o la «pista búlgara» de los ochenta, que llegan hasta los «progroms» mineros contra Bucarest, producto a su vez de complotos involucristas, o las guerrillas serbias de Knin, estrechamente teledirigidas desde Belgrado. Se buscan respuestas en supuestas esfinges como Milosevic, Kadijevic, Stanculescu o Iliescu, cuando la realidad suele ser más prosaica: la proliferación de focos de poder y las actitudes individualistas son precisamente las causantes de situaciones inesperadas. Dicho de otra manera, el problema suele consistir en que nadie controla nada completamente.

Así, los regímenes comunistas entronizados en el área balcánica construyeron toda una mitología que insistía en su acceso al poder por propios méritos, al margen de la presencia de los tanques soviéticos, decisiva en el caso de Hungría o Polonia. Los guerrilleros albaneses o yugoslavos habían liberado sus países con su propio esfuerzo, mientras que los comunistas búlgaros y rumanos estaban en el alma de las conspiraciones que derribaron a sus regímenes fascistas. Por lo tanto, y según la versión oficial, en esos países se había producido una revolución genuina. Lógicamente, además, tal enfoque llevaba diluido el germen nacionalista que cada líder local se preocupó de mantener vivo: Hohxa, Tito y Ceausescu desafiaban abiertamente a Moscú, o jugaban con él al gato y al ratón. Jivkov protegía a Bulgaria de la amenaza turca, exterior e interior. Y además existían otras variantes: Belgrado y Sofía enfrentadas por las fronteras macedonias, los yugoslavos líderes del movimiento de no-alineados, Bucarest en sordo duelo conceptual con Budapest por Transilvania, y todos con su propio modelo nacional de desarrollo socialista (Lendvai, 1970).

Desde luego, no se puede negar que los nuevos regímenes no se afirmaron en el poder sin ejercer una dura represión de tipo estalinista, que duró hasta bien entrados los años cincuenta. Pero por otra parte, el discurso social-nacionalista balcánico no era una mera capa de pintura ideológica. Tenía un contenido real, pues a largo plazo aportó unas ventajas sociales que antes no existían: infraestructuras sanitarias, pensiones, asilos, escuelas, guarderías y otros beneficios del «welfare state». Desde Occidente esos logros pueden parecer totalmente limitados, pero para una población que no tuvo demasiadas oportunidades de hacer comparaciones fueron un avance real si se toma como punto de partida la miseria existente en amplias zonas rurales y aún in-

dustriales de los Balcanes antes de la guerra. Ahora, tras la caída de los viejos regímenes, la población más humilde teme perder esas ventajas, caso de que prospere un capitalismo salvaje. Y ese es un factor que explica el inmovilismo político en amplias zonas de Bulgaria, Rumania o Serbia. Un ejemplo impresionante: el 60 % de los 160.000 integrantes de la minoría turca en Bulgaria que emigraron del país en 1989 han regresado desde Turquía, decepcionados ante el «capitalismo salvaje». Las familias más nutridas, en especial, echaban muy en falta los servicios médicos y la escolarización gratuitos. Es más, un tercio votó por el Partido Socialista Búlgaro (PSB), que es el antiguo Partido Comunista Búlgaro (PCB) reconvertido, aunque fueron precisamente los comunistas los que desencadenaron la brutal campaña de bulgarización de los nombres musulmanes en 1984-85 (Gresh, 1991).

En realidad esa obra dio lugar a unas implicaciones tan complejas que de momento la sociología occidental apenas las ha añadido, a pesar de que durante los años setenta y ochenta desarrolló una buena cantidad de estudios sobre la cambiante realidad balcánica. Estudiosos como P.R. Sinclair detectaron en Bulgaria la aparición de un nuevo estrato social de burócratas, directores y especialistas técnicos (Sinclair, 1982). John W. Cole, por su parte, aportó sugerencias muy interesantes en la misma dirección para el caso de Rumania (Cole, 1981). Las consecuencias sociales del sistema político yugoslavo generaron multitud de ensayos e investigaciones, y a lo largo de las dos últimas décadas estudiosos como Farkas, Vuskovic, Oleszczuk o Parkin, entre otros, desarrollaron sofisticados análisis sobre su estructura social (Farkas, 1975; Vuskovic, 1976; Oleszczuk, 1980; Faber, 1976). En general, y por paradójico que pueda parecer, resultaba que incluso los regímenes políticamente más dogmáticos habían sentado en los Balcanes las bases para crear una especie de clases medias a partir de parcelas de poder local, político o económico. Para los planificadores de los años cincuenta, el desarrollo de una industria pesada según el modelo stalinista era la mejor garantía de supervivencia en los nuevos Estados del «socialismo real». Además, transformaban las nutridas masas de campesinos que componían la base de la sociedad en un proletariado urbano teóricamente afecto a la revolución instaurada.

El resultado final fue enormemente más intrincado. Así, las universidades hubieron de formar a un nutrido ejército de especialistas para poder mantener el rápido crecimiento de los proyectos industriales gigantescos. Además, en muchas zonas los obreros eran en realidad trabajadores-agricultores que se trasladaban diariamente desde sus aldeas o granjas a las fábricas establecidas en el campo o ciudades de provincias. En su trabajo arriba mencionado, Cole pone de relieve con

agudeza que en Rumania el resultado de dobles sueldos —como agricultores y como trabajadores industriales— implicaba una especie de «obrero de clase media», que además solía tener parientes en la ciudad, con la que intercambiaba alimentos, prestaciones e influencias. En definitiva, Cole nos traza el ajustado esquema de una economía paralela que el Estado toleraba porque suplía las deficiencias de distribución y consumo que implicaba la planificación central, pero que a su vez generaba redes de poder e influencia, de «padrinazgo» o «compadrazgo» e incluso corporativo-profesionales. Todo ello era ampliamente favorecido por los peculiares mecanismos antropológicos de corte mediterráneo. Sin embargo, el ejemplo ofrecido por Cole, aunque abarcaba un extenso sector socioeconómico, no era el único. Redes de poder político local se entrelazaban con otras de influencia social y corporativa, y con todo tipo de economías paralelas, hasta el punto de que en cierta ocasión un obrero de Brasov definió cínicamente las siglas PCR como «Pile, Cunostinte si Relatie», esto es: «Enchufes, Contactos y Relaciones». Por si fuera poco, todo este tejido se entremezclaba con el generado por el enorme armazón burocrático-administrativo que se había creado para sostener a un nuevo Estado con unas funciones y responsabilidades mucho más ramificadas que las detentadas antes de la guerra. Y a todo el conjunto debe añadirse, en el caso de Yugoslavia, las implicaciones generadas por las diferencias nacionales y étnicas.

Todo eso le dio a los regímenes hasta hace poco vigentes una genuina base popular, con un respaldo tanto más amplio cuanto que el sistema aseguraba una proyección social a las clases humildes como nunca antes habían tenido. El campesino desposeído realmente podía aspirar a enviar a su hijo a la universidad, de la cual saldría convertido en elemento de la nueva clase media técnica, con sus implicaciones de poder y respeto social. Cuarenta y cinco años es un periodo muy corto para que la memoria, personal o generacional, borre el recuerdo de la miseria y el aislamiento anteriores a la guerra. Y aunque ahora se niegue con pasión, ahí están para avalarlo los bastiones rurales del PSB en Bulgaria o del Frente de Salvación Nacional (FSN) en Rumania, los 200.000 manifestantes que en Sofía acudieron a despedir los restos del ideólogo comunista Georgi Dimitrov el 23 de julio del año pasado, o incluso los guerrilleros serbios de Croacia, de clara extracción proletariocampesina.

Rumania y Bulgaria: una vía escasamente trazada

Los regímenes comunistas búlgaro y rumano se derribaron uno tras otro, con poco más de un mes de diferencia. Ambos estaban presididos por dos viejos dinosaurios de obstinado inmovilismo: Nicolae Ceaușescu y Todor Jivkov. Este último era, como jefe del Estado y del Partido desde 1956, el estadista más veterano de Europa. Su dictadura transcurrió tan discretamente como su caída. El golpe palaciego llevado a cabo por sectores aperturistas del mismo PCB pasó muy desapercibido para los medios de comunicación occidentales, pues se produjo el 10 de noviembre de 1989, al día siguiente de la caída del Muro de Berlín. En realidad, el viraje cogió por sorpresa a la inmensa mayoría de los búlgaros.

Dado que el régimen no se había manchado de sangre con la feroz represión de un alzamiento popular —que por otra parte, tampoco se produjo hasta la caída de Jivkov—, el PCB intentó continuar en el poder sin apenas maquillaje. Hasta el 3 de abril de 1990 no cambió su denominación por la de Partido Socialista Búlgaro. Esta fue una diferencia importante por relación a lo acontecido en Rumania. Mientras tanto la oposición política iba tomando forma prácticamente desde la nada. Con anterioridad a noviembre de 1989, sólo un movimiento ecologista («Ecoglasnost»), había encabezado las protestas contra el régimen. La Unión de Fuerzas Democráticas (UFD), también conocido como los «azules» (por oposición a los «rojos» del PCB/PSB), fue el resultado de la coalición de numerosos grupos y movimientos opositores.

A lo largo de 1990, los duros combates entre ambas formaciones políticas, el rechazo sistemático de la UFD a entrar en un Gobierno de coalición con el PSB, o las continuas movilizaciones en las calles de Sofía —que alcanzaron muchas veces los cien mil manifestantes— generaron una dinámica política tan dura y cargada de crisis como la rumana, aunque sus incidencias fueran menos espectaculares, y muy inferior la atención prestada por los medios de comunicación occidentales. Sin embargo, también hubo violencia política, durante la campaña electoral y antes, hasta el punto de que los telespectadores de los debates parlamentarios acudían a las puertas del hemiciclo para «ajustar cuentas», en el sentido físico de la expresión, con los oradores que no habían sido de su agrado. Y en julio reverdecieron las tensiones étnicas entre los nacionalistas búlgaros y la minoría turco-musulmana que ya habían tenido un alarmante comienzo en el mes de enero, a raíz de que el Gobierno abrogara las disposiciones bulgarizadoras.

Los meses de Gobierno provisional rumano fueron todavía más tormentosos. El violento crepúsculo del

régimen comunista generó más interrogantes que certidumbres. Aún están por aclarar las razones y responsabilidades en torno a la represión del alzamiento popular en Timisoara, el sentido último de la precipitada ejecución del matrimonio Ceausescu, la identidad de las fuerzas a las que se enfrentó el Ejército durante tres días en las calles de Bucarest, el suicidio del general Milea (ministro de la Defensa), el cambio de bando de los militares y el supuesto golpe frustrado del general Guse la noche del 22 al 23 de diciembre, así como otras muchas preguntas relacionadas con la revolución de diciembre de 1989. Pero las incógnitas no pararon ahí, continuaron planteándose a lo largo de la primera mitad de 1990. Primero, ya el día 12 de enero, con lo que parece fue un segundo intento de golpe de estado interno dentro del recién nacido FSN, surgido de la revolución, y que ahora detentaba el poder. Luego siguieron otras crisis, a cual más enrevesada, que culminaron los días 14 y 15 de junio con el asalto de los mineros del Valle del Jiu contra los manifestantes de la oposición radical, los cuales desde el 27 de abril ocupaban el centro de Bucarest.

Así, ya desde enero la sociedad rumana perdió aquella sensación de «comunidad colectiva» que había vivido en los días de la revolución y comenzó a dividirse —no sin horror por parte de muchos— según sus intereses políticos o de clase. La comunidad ideal de todos los rumanos que los comunistas decían haber logrado nunca había existido. Paradójicamente, logró su momento de gloria durante un mes, tras la caída del régimen, y luego desapareció. Además, y cara al exterior, el «pogrom de los mineros» terminó por pulverizar la imagen heroica del pueblo rumano luchando con las manos vacías y como un solo hombre contra las fuerzas de la tiranía, algo que en Europa no se había visto desde la sublevación húngara de 1956. Por el camino quedaron unos disturbios étnicos de gran violencia entre las comunidades húngara y rumana de Transilvania (Tîrgu Mures, 20-21 de marzo), que ya prefiguraban los actuales conflictos armados nacionalistas en los Balcanes.

Pero lo más desconcertante para los analistas occidentales fueron las elecciones celebradas en ambos países. En Rumania, los comicios del 20 de mayo sorprendieron por la aplastante mayoría de votos conseguida por el FSN: el 85,07 % de los sufragios para Iliescu como candidato a la Presidencia, el 66,31 % para diputados a la Asamblea Nacional (263 escaños de un total de 400), y el 67,02 % para la representación en el Senado (92 de los 119 escaños). Turbaba la aceptación popular de una formación política, el FSN, surgida de la revolución del 22 de diciembre de 1989 pero pronto consagrada a salvar las estructuras de poder del anterior régimen. En Bulgaria, las primeras elecciones legislativas, celebradas entre el 10 y 17 de junio, dieron la

victoria al PSB con un 47,15 % de los votos y 211 escaños sobre un total de 400, obtenidos en las zonas rurales y ciudades provinciales, mientras que la UFD ganaba en Sofía y se llevaba un 37,84 % de los sufragios (144 diputados). Desde Occidente no era fácil entender para qué habían servido las rebeliones y manifestaciones, los sacrificios, el heroísmo y todo el ruido que se había generado en aquella esquina de los Balcanes. Desde luego, se habían producido coacciones y fraudes en los procesos electorales, pero ni aún así se podía comprender la flagrante victoria de lo que la mayor parte de los analistas consideraba un triunfo de los comunistas. Consecuentemente se comenzó a hablar de la «tradición de obediencia al poder» de búlgaros y rumanos, de la influencia de la Iglesia ortodoxa y argumentos con similar grado de inconsistencia (Tertsch, 1990).

Sin embargo, a partir de las elecciones, el estilo de las dos transiciones se distanció claramente. En Rumania, el «pogrom» de los mineros dio lugar a una dura respuesta occidental —bajo la forma de suspensión de ayudas y créditos— que obligó al ejecutivo a un esfuerzo de serenidad. La gran manifestación del 13 de julio en la que parte de la población bucarestina se solidarizó con los estudiantes de la oposición radical detenidos a raíz de los incidentes ocurridos el mes anterior en la Plaza de la Universidad marcó una especie de frontera: por fin, bajo el nuevo régimen, una gran concentración popular transcurría sin incidentes. En noviembre recomenzaron las protestas, coincidiendo con las primeras liberalizaciones de precios (con encarecimientos del 100 % y 200 % en algunos productos), acompañadas de huelgas en diversos sectores. Así, la contestación fue subiendo de tono, y se esperaba que en Navidades, coincidiendo con el primer aniversario de la revolución, las movilizaciones de la oposición radical harían caer el Gobierno.

El 7 de noviembre incluso se fundó un movimiento, Alianza Cívica (más tarde convertido en partido), con el fin de coordinar fuerzas e intentar una especie de segunda revolución «de terciopelo», según el modelo checo. Sin embargo, la fecha mágica llegó y ni los manifestantes de Timisoara ni los de Bucarest pudieron nada contra el FSN en el poder. De hecho, al menos en la capital, las manifestaciones ni siquiera fueron tan importantes como se esperaba. A partir de ese momento, la oposición radical perdió la iniciativa, a pesar de que no faltaron ocasiones para la movilización, como los nuevos reajustes de precios del Gobierno o el pacto de amistad firmado con la URSS, al que no consintió ningún otro Estado del antiguo bloque comunista.

A esas alturas la dinámica rumana contrastaba vivamente con la del vecino búlgaro. Allí las elecciones no trajeron la estabilidad política. En julio, los «azules» de

la UFD consiguieron forzar la dimisión del presidente «rojo» Mladenov tras difundir por televisión una cinta de video en la que a finales del año anterior éste proponía la utilización de carros de combate para disolver una manifestación ante la Asamblea Nacional. Luego, cuando a finales de octubre el primer ministro Lukanov pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios al programa de reformas económicas del Gobierno, la UFD se negó en redondo. Un mes más tarde, el enfrentamiento había llegado a tales extremos que la oposición llevó a cabo un boicot parlamentario, mientras el sindicato «Podkrepa», integrado en la UFD, desencadenaba una huelga general. En tres días pararon unos 870.000 trabajadores en todo el país, y el 30 de noviembre el Gobierno del PSB se vio obligado a dimitir. De resultas de ello se constituyó un Gobierno de concentración encabezado por Dimitur Popov, un jurista políticamente independiente.

Lo paradójico es que esos choques han venido sirviendo, hasta ahora, para mantener una cierta coherencia en los campos «rojo» y «azul». Los resultados finales son interesantes. En Rumania, y desde el verano de 1990, las reformas avanzan lentamente, en medio de un pulso político más bien soporífero. Ahora, tras la última crisis, el Gobierno Stolojan habla de unas primeras y precipitadas elecciones municipales para mediados de diciembre, y se espera que también ese mes se apruebe definitivamente el nuevo proyecto de Constitución. Mientras tanto, lejos de Bucarest, se llevan a cabo sordos reajustes sociopolíticos, muchas veces teñidos de corrupción. Por contraste, en Bulgaria, los choques entre el PSB y la UFD han generado una mayor dosis de transparencia política, y también unas transformaciones contra reloj, en previsión de que en cualquier momento se desbaraten los momentáneos equilibrios conseguidos. Prueba de ello son, por ejemplo, la Constitución, aprobada el 12 de julio, la nueva ley electoral y reformas económicas aprobadas a gran velocidad, que hasta el momento gozan de los elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) por su seriedad y valentía.

Los resultados de las últimas elecciones búlgaras, celebradas el pasado 13 de octubre, reflejan mejor que todos los datos manejados hasta ahora la aguzada polarización política que vive la sociedad búlgara. Por primera vez la UFD ha obtenido una victoria electoral sobre sus rivales del PSB, aunque sólo por un estrecho margen del 3 % (36 % contra 33 %, respectivamente). Claro que si se contabilizan los votos obtenidos en las elecciones por todos los partidos anticomunistas, suman dos tercios del total. De nuevo el problema de la disgregación en el abanico de fuerzas políticas. Estos resultados pueden ser el comienzo de un nuevo camino, o sólo una curva más hacia el punto de partida.

De momento parecen irse quedando atrás las turbulencias políticas de 1990. Por desgracia, a la que se comienza a escarbar un poco, salen a la superficie datos preocupantes. Uno de ellos es la muy precaria unidad de la UFD, formalmente dividida ya en las ramas liberal, centrista y el «Movimiento nacional»: la última, de tendencias acusadamente derechistas, es la más respaldada por los votos. Además, el sindicato «Podkrepa» actúa ya como una especie de brazo activista semi independiente liderado por el todopoderoso Konstantin Trentchev, una especie de «ángel purificador» que no ha dudado en lanzar a sus seguidores a la calle cuando los políticos le parecían inactivos. De hecho, él fue quien estuvo detrás de las huelgas que terminaron por provocar la dimisión del Gobierno Lukanov. Por otra parte, el PSB conserva la gran infraestructura y contactos del PCB y dará una dura batalla en un Parlamento que va a estar muy dividido y al que la Constitución otorga amplios poderes sobre la Presidencia de la república. Además, subsiste la tensión étnica en las áreas de minoría étnica turca, la cual ha obtenido en las elecciones, a través de su Movimiento para los Derechos y Libertades (MDL), un 6,5 %. La alianza que deberá llevar a cabo con el MDL para poder gobernar no pondrá en una situación cómoda a la UFD. Por si faltara algo, Bulgaria puede mezclarse en cualquier momento en la crisis yugoslava a partir de sus ya antiguas reivindicaciones sobre Macedonia, buena parte de cuya población es de nacionalidad búlgara. Llegado el caso, tendrían medios para complicar tremendamente la situación: el Ministerio de la Defensa en Sofía ha confirmado el dato de que en 1986 recibieron misiles soviéticos SS-23 «Spider», los cuales, se admite, podrían ser utilizados «en caso de agresión» (Gresh, 1991).

La oposición búlgara ha conseguido afianzarse allí donde sus homónimos rumanos fracasan, hasta ahora, lamentablemente. Y eso con el añadido de que las victorias de unos y las derrotas de los otros coincidieron más o menos en las mismas fechas a lo largo de 1990. El último acto de esos destinos tan desiguales ha tenido lugar recientemente, pues la derrota de los comunistas búlgaros el 13 de octubre último se produjo unos veinte días después del confuso episodio del nuevo asalto minero a Bucarest. Dicho de otra manera, las dinámicas políticas desarrolladas en uno y otro país a lo largo del año pasado han marcado profundamente los acontecimientos de 1991. ¿Por qué esas diferencias?

Una respuesta importante tiene que ver con el papel jugado en Rumania por los partidos «históricos», el Nacional-Campesino y el Liberal, cuyos cuadros dirigentes regresaron del exilio inmediatamente después de la revolución de 1989. Esos veteranos líderes no estaban en absoluto preparados para el panorama que en-



PAISES BALCANICOS

contraron. Les eran naturalmente hostiles los restos de la «nomenklatura» comunista, pero también los nuevos partidos surgidos de la revolución, comenzando por el FSN y terminando por el último grupúsculo constituido en aquellos días, que enseguida comenzaron a acusarles de no entender nada de la situación real en Rumania. Ellos no habían sufrido las privaciones cotidianas a que sometió el país la disparatada política económica de Ceausescu, se insistía: no habían comido «salami con soja». Por otro lado, a muchos rumanos se les antojaban heraldos del capitalismo más salvaje o agentes de intereses extranjeros.

En realidad, esos dirigentes rozando la ancianidad que son Câmpeanu, Coposu o Ratiu no resultaban nada adecuados para lanzarse a la política callejera y turbulenta que practicaban los demás dirigentes de partido. En lugar de ello, optaron abiertamente por la praxis parlamentaria y se situaron a medio camino entre el posibilismo gubernamental del FSN y la oposición radical, sin convencer demasiado ni a unos ni a otros. Desde entonces les aquejan diversos males, entre ellos las importantes escisiones y escándalos internos y, sobre todo, una tibieza que ya se puso de manifiesto durante la ocupación de la Plaza de la Universidad de Bucarest el año pasado por parte de la oposición radical, y se volvió a repetir el 26 de diciembre último con motivo del frustrado regreso del ex rey Mihai, al que la policía detuvo y devolvió a Suiza a las pocas horas de haber aterrizado en el aeropuerto de Otopeni. Ni en uno ni en otro caso la oposición «histórica» ha desempeñado un papel relevante al lado de la radical. El juego político rumano, lleno de golpes bajos, hipocresía y promesas incumplidas, ha resultado muy duro especialmente para los liberales. Pero en cambio, ambos partidos tienen sus propios militantes, votantes e influencias, y ello ha servido para mantener dividida a la oposición, ya disgregada de por sí, que no ha logrado construir coaliciones importantes. Ese estilo ha proliferado hasta tal punto que ni siquiera los dos grupúsculos socialdemócratas que recientemente desertaron del FSN han querido unirse.

Pero la manifestación más dramática de este fenómeno de putrefacción ha sido el enfrentamiento que mantuvo el Gobierno con la representación parlamentaria de su propio partido, sin que el elusivo presidente Iliescu haya querido o sabido mediar. El resultado ha sido que mientras el equipo de Roman forzó la marcha imponiendo duras medidas económicas para la transición económica, en el Parlamento se ha ido difiriendo la aprobación de la nueva estructura legislativa, en medio de tensiones de todo tipo. El último capítulo de ese galimatías ha sido la forzada dimisión de Petre Roman durante la reciente protesta violenta de los mineros. La brecha está totalmente abierta, y el enfrentamiento en-

tre la facción del ex primer ministro y los conservadores que siguen a Iliescu se conoce ya en Rumania como la «guerra de las dos rosas», por referencia al símbolo del FSN.

Así, el Gobierno estaba siendo boicoteado por su propio partido desde la base, situación que esconde la supervivencia y actividad de una nueva «nomenklatura» bajo las siglas del FSN. Tal estrato es la suma del ya existente en tiempos de Ceausescu más los antiguos caciques no integrados en el desaparecido Partido Comunista Rumano (PCR) y los oportunistas de nuevo cuño. Buena parte de esa capa social actúa bajo la cobertura del FSN, vela por sus intereses exclusivos, maneja sus propias fuerzas y contactos y genera una competencia excluyente y destructiva. Hablar de neocomunismo, como insisten machaconamente muchos analistas de prensa, es ilusorio (Tertsch, 1991): aquí no se manejan proyectos ideológicos, se ventilan cuestiones materiales de alcance más o menos limitado. La oposición radical también está desunida, y es más visceral que constructiva. Y los partidos históricos (liberales y nacional-campesinos) se deciden por todo y por nada.

Es en este marco donde el 25 y 26 de septiembre de 1991 se produjo en Bucarest una nueva «minería», como dicen los rumanos recordando con ironía las «espartaquizadas», «universiadas» y otros certámenes atléticos organizados por los antiguos regímenes comunistas. Ya el 18 de febrero de 1990 los mineros desfilaron por el centro de la capital apoyando al Frente de Salvación Nacional. En cambio, el 14 y 15 de junio de ese año llevaron a cabo un verdadero «pogrom» contra los intelectuales y estudiantes de la oposición radical que habían ocupado la Plaza de la Universidad durante más de dos meses.

¿Quiénes eran esos mineros, qué buscaban? La visión externa de un lugar tan mal conocido como Rumania suele tener dos fases reiterativas: durante las épocas en que se conserva un orden sólo aparente, se considera que las autoridades son perfectamente representativas. Pero cuando una erupción deshace esa apariencia, surge la imagen apocalíptica, que tiende a buscar explicaciones en supuestas fuerzas ocultas. En cambio, desde dentro del país, los altibajos, aderezados con caústico fatalismo, se suelen percibir como fruto de un orden endogámico, demasiado peculiar para que lo entiendan los extranjeros. A éstos, muchos rumanos gustan de exhibirles un repertorio paranoico ya algo manido: los mineros son la masa de maniobra de la siniestra «Securitate» que, más o menos transformada, continúa operando a sus anchas. Claro que al explicarlo también se lo creen en parte y extienden las culpas a causas extranacionales, desde los judíos a la CIA y la KGB. Dentro de esta línea otra teoría transforma a los mineros en una

especie de guardia pretoriana del criptocomunista Iliescu.

Ninguna de esas versiones es descartable del todo ni tampoco hay que desechar cierta manipulación neocomunista, a la vista de las banderas rojas que exhibían los primeros grupos de mineros. Al fin y al cabo, desde noviembre del año anterior existe en Rumania el Partido Socialista del Trabajo (PST), liderado por Ilie Verdeț, un importante ex corifeo de Ceaușescu, que el 22 de diciembre de 1989, en plena revolución y tras la huida de su jefe, intentó organizar un gobierno de continuidad. El órgano del PST «Socialistul» es de principio a fin el «lenguaje de madera» hecho periódico, pero el partido ha conseguido ascender en grandes empresas del país amenazadas por la reconversión, entre ellas las extractivas del carbón.

Afirmar a secas que los mineros sólo se representan a sí mismos es desconocer que desde hace un año se sucede en Rumania un continuo goteo de huelgas en muchos sectores industriales y profesionales. En más de una ocasión se han transformado en políticas y han terminado por pedir la dimisión del Gobierno y sus planes de reconversión económica. El pasado mes de junio, la sindicalista Unión Nacional Confederativa ya pedía un paro general contra Roman, y en esta línea actuaba también la Federación de Uniones Mineras. Petre Roman parlamentó con líderes sindicales y directivos empresariales, y consiguió que los ferroviarios, los 13.000 huelguistas de las acerías FAUR y los maestros volvieran al trabajo, desactivando la llamada a la huelga general. Pero el tirón estaba resultando muy difícil de soportar: en agosto los precios oficiales habían subido ya en un 160 % desde noviembre de 1990, y eso a partir de un consumo casi inexistente y de pésima calidad.

El protagonismo de los «caras tiznadas» no es gratuito pues de hecho constituyen uno de los escasos sectores obreros con cierta tradición combativa en un país hasta hace poco muy escasamente industrializado. Ya en 1916 los mineros del mismo Valle del Jiu llevaron a cabo una huelga general, seguida de otra en 1919 y una tercera en 1929, a poco de llegar los nacionalcampesinos al poder, que fue duramente reprimida por los disparos del Ejército con un saldo de treinta muertos. Sobre todo, esos mismos trabajadores protagonizaron la protesta social más importante contra el régimen de Ceaușescu en 1977, y se atrevieron porque sabían que para el discurso semistalinista del régimen representaban una élite. Desde entonces la Securitate los controló e infiltró muy de cerca, pero eso solo no explica las «mineriadas», punta de un iceberg profundo y complejo.

Si se idealiza a las multitudes que llevaron a cabo la «revolución de terciopelo» en Praga o derribaron el

Muro de Berlín, también se debe reconocer la existencia de otras masas con otros puntos de vista, incluso variables. Los mineros rumanos han actuado para mejorar sus desastrosas condiciones materiales, añadiendo el orgullo herido de los que el anterior régimen glorificó y pagó como flor y nata del proletariado. Por eso respaldaron las paranoicas justificaciones de Iliescu en junio de 1990, de añejo sabor stalinista. Y también por eso comenzaron a atender y agradecer los actos de reconciliación organizados por los estudiantes e intelectuales a los que poco antes había apaleado, para terminar ocupando conjuntamente, el pasado 25 y 26 de septiembre, la Plaza de la Universidad.

A pesar de su dimisión aún es pronto para saber qué pasará con el futuro de Petre Roman, que a lo largo del último año había adquirido muchas tablas como político. Pero en cualquier caso, la «mineriada» vuelve a recordar que si desde Occidente se quiere entender qué ocurre en el Este, se debe evitar la personalización excesiva, tanto en el trato como en los análisis, por poco o muy simpáticos que nos caigan los Roman, Iliescu, Gamsajurdia, Milosevic o Tudjman. Es cierto que en momentos de crisis e incertidumbre las personalidades son a veces los únicos puntos de referencia. Pero hay muchas fuerzas en escena, y en parte funcionan por impulsos propios.

Sin embargo, quizás el rasgo más preocupante de los incidentes haya sido la indefinición, tanto por parte de los mismos mineros como de Iliescu y la mayor parte de las fuerzas de oposición. Dado que en realidad todo el nuevo sistema político y económico se basa en un confuso equilibrio, el nuevo Gabinete de Theodor Stolojan, potencialmente más rupturista que el anterior, no parece sino perpetuar la situación de tablas hasta las próximas elecciones, si no se produce alguna nueva crisis por el camino.¹

La conclusión final no es complicada. Tanto en Bulgaria como en Rumania el proceso político tiende a la disgregación e indefinición ideológica. Ese es un serio peligro que propicia la inestabilidad. Nada de ello ayuda a una durísima transición económica que realmente aún está por comenzar. Más grave aún, todo el conjunto de cambios socioeconómicos está lastrado por la herencia de una mentalidad que reúne cierta nostalgia por los aspectos positivos del anterior régimen —especialmente la seguridad—, la escasez de actitudes «capitalistas», y la creencia de que Occidente aportará de una manera u otra la ayuda más sustancial para la transfor-

1. El análisis de la «mineriada» de septiembre corresponde a un artículo no publicado, elaborado por el autor de estas líneas y Enrique Ucelay Da-Cal para *El País*.

mación. Al menos a Bulgaria y Rumania les quedan varios años de travesía por el desierto.

Yugoslavia o la herencia que tardó demasiado en gastarse

Normalmente se suele admitir que el camino hacia la desintegración de Yugoslavia comenzó con la muerte del mariscal Tito, el 4 de mayo de 1980. En realidad, la crisis del Estado siempre estuvo latente. A lo largo de los años sesenta y setenta, los admiradores marxistas del sistema autogestionario yugoslavo (económico y social) lo presentaban como un producto teórico altamente depurado, vigoroso y original, alternativo al dogmático e inefectivo modelo soviético, que necesitaba de la fuerza para imponer sus puntos de vista en Hungría y Checoslovaquia. En cierta manera, las virtudes del modelo yugoslavo se realzaban por el hecho de que se trataba de un Estado multinacional. Como las regiones y repúblicas gozaban de una considerable autonomía política y económica, las disputas y tensiones entre ellas se contemplaban como un signo de madurez que nada tenían que ver con las violentas tendencias centrífugas del reino de Yugoslavia en los años de entreguerras.

Nada más lejos de la realidad. La «vía yugoslava» hacia el socialismo se había ido conformando a trancas y barrancas, entre audaces improvisaciones y sutiles equilibrios a varias bandas (Samary, 1989). En realidad Tito había comenzado por aplicar el modelo stalinista de desarrollo, que como en el resto de los países del Este debía de industrializar a Yugoslavia en un tiempo récord, rebajando drásticamente el porcentaje de población campesina, que tras la guerra mundial aún era del 70 %. Los planes quinquenales, iniciados a partir de 1947, no presuponían ninguna descentralización. Pero el pulso mantenido con el Kremlin, que deseaba ejercer un mayor control sobre la cúpula de poder yugoslava, llevó a la expulsión de este país de la Cominform en 1948. A pesar del acercamiento a Occidente, lo que supuso la necesidad de sobrevivir con la tutela del bloque oriental drásticamente reducida, el plan quinquenal se prolongó hasta 1952.

Mientras tanto se ensayaba la descentralización económica y administrativa, consagrada por la Constitución de 1953 y compensada con una enorme concentración de poder en las manos de Tito, ahora presidente de la República y jefe de Gobierno. A pesar de esta especie de NEP, ni disminuyó el férreo control político ni las dudas sobre las raíces últimas del sistema. Expresión de lo primero fueron las condenas aplicadas por desviacionismo a Milovan Djilas, antiguo amigo y co-

laborador de Tito, cuyas críticas no podía asimilar el régimen. De otro lado, los responsables de la economía comenzaron a regresar a las conocidas aguas de la planificación global a poco de haberse lanzado a la descentralización. Como resultado, en 1957 se volvió a los planes quinquenales, aunque nunca se llegó hasta el fondo en el estilo del stalinismo de la posguerra.

La indecisión llevó la economía al atolladero, y en 1961 comenzó a trabajarse en un nuevo viraje coincidiendo con la modernización que todos los países del Este inician y concluyen en 1967 al haberse asimilado ya completamente que el sistema burocrático monopolista de Stalin había muerto definitivamente con su creador. En este marco, Yugoslavia y China protagonizarán verdaderas «segundas revoluciones». En ambos casos, los dirigentes comunistas habían llegado al poder como fruto de una guerra civil y contaban con el impulso de una corriente auténticamente nacional que les impulsaba a probar experiencias de desarrollo originales. Con todo, también esta vez el nuevo experimento arrancó con indecisión. Incluso cuando los países occidentales ya habían dado los créditos necesarios para respaldar los cambios económicos, Tito se echó atrás. Durante un tiempo tuvo lugar un aparatoso viraje antinorteamericano y prosoviético. Y a pesar de todo, en 1963 se aprobó una nueva Constitución (la tercera desde el advenimiento de los comunistas al poder), que aportaba insólitas novedades. Parte importante de la nueva carta se dedica a cuestiones económicas, incorporando el principio de la gestión obrera y la participación en los beneficios. También se descentralizaba el sistema administrativo, confiriendo mayor independencia legislativa a las repúblicas y las comunas. Pero el cambio real aún estaba por producirse; tendría lugar abruptamente en 1966, mezclado con la cuestión sucesoria. Cuando se produce la crisis, el mariscal es un anciano de setenta y cuatro años.

Las muertes de Lenin y Stalin habían sentado claros precedentes sobre las complejas fuerzas que se liberaban tras la desaparición de los destacados líderes marxistas que encarnaban al Estado y al Partido. En Yugoslavia, el reciente pasado de sangrientas luchas interétnicas añadía un riesgo especialmente preocupante. Por entonces, en el complejo tinglado de poderes y contrapoderes al más alto nivel de la Federación, Tito seguía inclinado del bando de los conservadores. Pieza importante en sus filas era Alexander Rankovic, antiguo líder guerrillero de primera hora y luego fundador de la policía secreta del régimen, la UDBA; que tan importante papel había jugado en tiempos del enfrentamiento con los soviéticos. De hecho, Rankovic ha sido definido en ocasiones como el Beria o el Lin Piao de Tito. Y por entonces, también en Belgrado, como antes en Moscú o Pekín, existía la posibilidad de que el

jefe del aparato de seguridad terminase erigiéndose como delfín y sucesor del gran líder, como daba a entender el nombramiento de Rankovic como vicepresidente de la República en 1963. Los encontronazos entre conservadores y oportunistas estallaron a lo largo de 1966 y terminaron con la caída en desgracia de Rankovic en junio, acusado de haber espiado al mismo Tito y de preparar un golpe de estado.

A partir de ese momento, quedaron abiertas las puertas hacia la liberalización real planeada el año anterior. Pero la pugna había implicado a todos los estamentos. Rankovic, que era serbio, encabezaba el grupo de conservadores, que eran de la misma nacionalidad. Frente a ellos, los dirigentes croatas y eslovenos habían aportado el contingente más compacto de reformistas. De hecho, en pleno tira y afloja, los eslovenos habían amenazado con ejercer el derecho constitucional a la secesión. También había sido decisiva la actitud liberal del general croata Ivan Gosnjak, ministro de la Defensa, junto con el jefe del contraespionaje militar y los responsables superiores de la política secreta de Croacia y Eslovenia.

Por otro lado, existió un riesgo muy patente de que los comunistas serbios interpretasen todo el asunto como una derrota nacional, por lo que Tito se preocupó de repartir cuotas de poder con ellos. También se potenció el papel político del Ejército, buena parte de cuyos mandos eran de origen guerrillero, la «vieja familia» de Tito. Así se conformó una nueva estructura estatal de claras tendencias presidencialistas, en la cual las bases económicas y la administración regional y local gozaban de una autonomía considerable y el Ejército actuaba como garante último de la unidad de todo el conjunto. Todavía estaban muy lejanos los días en que las dos fuerzas básicas de esta tríada terminarían enfrentándose y dejando fuera de combate a la sombra de una presidencia. Pero no así los gérmenes del desastre, que comenzaron a aparecer mucho antes de la muerte del mariscal.

Las manifestaciones estudiantiles de 1968 fueron en Belgrado una versión local de las parisinas, incluyendo la aparición televisiva de Tito en emulación de De Gaulle. Pero no generaron mayores cambios en la trayectoria del régimen, excepto algunos parches «sociales» debidos a la Liga de los Comunistas de Serbia. En cambio, los disturbios en la recién inaugurada Universidad de Pristina, capital de la región de Kosovo, fueron el precedente de los disturbios crónicos que prenderían a partir de 1980. Ya por entonces, los albaneses de la paupérrima región protestaban por las consecuencias negativas que había tenido para ellos la política económica descentralizadora iniciada en 1965. Por otro lado, utilizando el aparato de seguridad con criterios panserbios, Rankovic había estado deteriorando durante años

la armonía social en Kosovo. Esas tensiones quedaron olvidadas por la amenaza temporal que supuso la invasión soviética de Checoslovaquia durante el mes de agosto de 1968. Tito, que junto con Ceausescu había apoyado a Dubcek con la esperanza de crear una reedición de la «Pequeña Entente» de los años treinta en versión «socialismo de rostro humano», se vio comprometido en la tensión subsiguiente. Durante un tiempo se pensó que el objetivo de los tanques soviéticos serían los díscolos regímenes socialistas balcánicos, y ante la amenaza, los yugoslavos se unieron olvidando temporalmente sus diferencias. Pero en 1971, Tito, cada vez más preocupado por dejar bien solucionada la cuestión sucesoria, insistió en elaborar una nueva Constitución. El debate subsiguiente sobre la soberanía y las contribuciones financieras de las repúblicas tuvo como consecuencia el prender el fuego a un nacionalismo croata que por primera vez sale a la calle, alineando además a varios dirigentes comunistas, entre ellos a Franjo Tudjman. Tito actuó con dureza secundado por la fidelidad de las fuerzas armadas y policiales. Reprimió las huelgas estudiantiles y desencadenó una purga contra todo el aparato comunista en Croacia. Siempre fiel a su juego de contrabalanzas golpeó también a los sectores progresistas de la política y la intelectualidad en Macedonia y Serbia, especialmente en la Universidad de Belgrado.

Todavía hubo más retoques hasta la muerte del mariscal, incluyendo una nueva Constitución en 1974. Se intentó contener la transición hacia el mercado libre —que amenazaría la hegemonía de la Liga de los Comunistas— instaurando una nueva forma de planificación contractual. Mientras, el sistema de rotación anual en la Presidencia en función de la nacionalidad de los representantes y el derecho de veto concedido a las repúblicas eran un seguro contra la hegemonía serbia. Sin embargo, el «modelo yugoslavo» estaba agotando su tiempo. La solución de compromiso entre la economía socialista y la de mercado comenzó a hacer aguas desde el momento de su aplicación en profundidad a lo largo de la segunda mitad de los años sesenta, cuando las medidas antiinflacionistas hicieron caer la producción y pusieron en la calle a 344.000 trabajadores ya en los primeros meses de 1968. Lógicamente, las crisis mundiales de los años setenta y ochenta no contribuyeron a mejorar la situación. Además, la descentralización había generado un descontrol que se manifestó en importaciones excesivas y hasta incoherentes que hicieron crecer la deuda externa dramáticamente.

Así, el célebre «modelo autogestionario yugoslavo» fue resultado de la improvisación de soluciones empíricas en medio del complejísimo equilibrio a varias bandas en que vivió inmersa Yugoslavia desde 1948 hasta 1966. Siempre fue un producto precario, aunque cum-

plió su función durante unos años clave. El problema radicó en que sus creadores y sustentadores no admitieron nunca que su vida era necesariamente efímera. Por el contrario, el «modelo yugoslavo» fue mitificado más de lo necesario y sobre todo más tiempo del conveniente. La muerte de Tito, con los problemas económicos y nacionalistas que inmediatamente comenzaron a surgir a la superficie, hubiera sido el momento de plantear un gran debate. Pero, comprensiblemente, era muy difícil vencer la inercia; siempre sería mejor reformar y parchear que correr riesgos jugando al todo o nada. Por otra parte, todavía en plena era brezneviana, Yugoslavia seguía siendo útil a los occidentales y era incalculable el riesgo de una ruptura violenta. El general británico sir John Hackett cosechó un gran éxito con un ensayo de ficción escrito a finales de los años setenta, poco antes de la desaparición de Tito, en el que planteaba el estallido de la Tercera Guerra Mundial para agosto de 1985. Y uno de los «casus belli» tenía su centro precisamente en Yugoslavia, a partir del fracasado intento de una formación política prosoviética de dar un golpe en Eslovenia, seguido de la invasión del Ejército Rojo en toda regla (Hackett, 1978).

Pero en último término, ¿quién tenía autoridad para poner el Estado patas arriba? Al fin y al cabo, el último gran líder yugoslavo había puesto toda su energía en crear un sistema de equilibrios tan perfecto que nadie debía sobresalir. El titismo rasó el aparato político en su conjunto y creó una raza de «políticos enanos», siempre por debajo del mariscal.

De hecho, como se vio, las primeras señales de alarma se habían dado ya en tiempos de Tito. Eso se denunció públicamente, como una justificación, durante el XIII Congreso de la Liga de los Comunistas Yugoslavos (LCY), en 1986: la crisis económica tenía que ver con las directrices erróneas del X (1974) y XI (1978) Congresos. En su momento, ni siquiera el mariscal había podido ir contracorriente en medio de la crisis mundial. Por tanto, seis años después de su muerte, cuando la situación ya estaba totalmente deteriorada y la situación internacional favorecía una remodelación del Estado en profundidad, ya nadie quiso ponerse al frente y responsabilizarse del sistema, basado en el célebre modelo.

Cabía la alternativa de operar las transformaciones sobre la marcha. Una transición paulatina no era una opción tan mala; al fin y al cabo, así se había creado el pomposo «modelo yugoslavo». Pero también para esa solución se tardó demasiado tiempo. El primer ministro federal Ante Markovic (croata), que fue su adalid más enérgico, puso manos a la obra seriamente en una fecha tan tardía como la primavera de 1989, a poco de su elección para el cargo. La decisión se había diferido en nueve años, y en buena medida ello tuvo que ver

con la larga agonía del viejo modelo, fruto a su vez de la mitificación que de él se hizo. A este respecto, las largas semanas que se tardó en dejar morir a Tito fueron un símbolo bien patente de lo que iba a ocurrir con el Estado que él había creado. Todo ello es una buena prueba de que Yugoslavia no era un ente tan endeble como se ha insistido machaconamente en los últimos meses. Precisamente si sus dirigentes hubieran tenido más conciencia del peligro de desintegración, quizás el Estado federal se hubiese salvado. Pero las reservas de «yugoslavismo» asociadas al viejo mito titista duraron demasiado. Sólo violentos bofetones fueron despertando a unos y otros.

1984 dio ya inequívocas señales de alarma: se supo que el nivel de vida había descendido en un 40 % desde 1979, que el desempleo alcanzaba al 15 % de la población, que la deuda exterior era de 20.000 millones de dólares. Se racionó la gasolina, y en Montenegro las multitudes llegaron a saquear varios comercios. En Kosovo habían hecho su aparición los atentados con bombas, y las autoridades respondieron a los asesinatos de policías con la ejecución de albaneses. También ese año se condenó a muerte a un nacionalista croata, y siguió su desarrollo el fundamentalismo musulmán en Bosnia. A pesar de todo, el Estado continuaba aplicando parámetros ideológicos de hacía veinte años, como lo demostró la detención y proceso de veintiocho intelectuales disidentes, entre ellos Milovan Djilas. Como contraste, durante el XIII Congreso de la LCY, que tuvo lugar dos años más tarde, los dirigentes comunistas hubieron de constatar con sorpresa la paralización e inoperancia del partido.

Con todo, el «shock» más decisivo tuvo lugar en 1987 con el escándalo de Agrokomerc, buque insignia de la industria en Bosnia-Herzegovina, que empleaba a 13.500 trabajadores. Las irregularidades que se descubrieron en este emporio durante el verano de ese año no tenían precedentes en la historia yugoslava: Agrokomerc había estado emitiendo pagarés sin fondos por un valor total de entre 290 y 500 millones de dólares, con el respaldo del Banco de Bihac (Bosnia), que tampoco podía cubrir esas enormes cantidades. La estafa afectaba a 57 bancos de cuatro repúblicas, especialmente Eslovenia, que encajó grandes pérdidas financieras.

Las consecuencias políticas de este «affaire» fueron importantes. Por supuesto, tuvieron repercusiones en el desencanto final de los eslovenos hacia la Federación. Según declararon los responsables de la banca de esa república, hacía tiempo que habían descubierto el fraude pero los dirigentes políticos bosnios les habían persuadido para seguir aceptando los pagarés. Consecuentemente, toda la cúpula política de Bosnia-Herzegovina estaba implicada. Hubo dimisiones en cadena, que alcanzaron a Hamdija Pozderac, miembro

prominente de la Liga de Comunistas de Bosnia, por entonces vicepresidente de la Presidencia colectiva federal. También cayó el primer ministro federal Branko Mikulic, otro destacado comunista bosnio, que desde mayo de 1986 se había labrado una reputación de concienzudo perseguidor de las irregularidades económicas y la corrupción. Así, el escándalo de Agrokomerc se convirtió en el espejo del podrido esperpento en que se había transformado el «modelo autogestionario». La autonomía económica sólo había servido para favorecer la irracionalidad y las irregularidades de todo tipo. Y no era el único caso, sino la punta de un iceberg. Al fin y al cabo, como afirmó en su proceso un extrañado Fikret Abdic, el director de Agrokomerc, la empresa no había hecho nada que no fuera práctica general en toda Yugoslavia. Pocos dudaron de su sinceridad.

Pero como además Agrokomerc había sido el trampolín de numerosos políticos bosnios que habían comenzado sus carreras como gestores de la empresa, quedaba al descubierto hasta qué punto el resultado de los intentos de Tito por potenciar y equilibrar la autonomía de las ligas comunistas regionales había desembocado en una «pepinière» de partidos-Estado y partidos-provincia utilizados por los arribistas como medios de promoción personal, cuando no transformados en fortalezas de caciquismo. La acumulación de críticas y dudas que generó el asunto no está ausente de la ofensiva que desencadenaron los más duros comunistas de la Liga, centrados en Serbia y en torno a Slobodan Milosevic. Con el tiempo terminarían por convertirse en los enterradores de la Yugoslavia que por entonces aún buscaban preservar.

El aperturismo que afectaba a la URSS y ciertos Estados claves del bloque oriental terminaron por precipitar dramáticamente la crisis yugoslava. Por mucho que pesara la inercia ya no se podía diferir por más tiempo la transformación. Pero, una vez más, se intentó improvisar en el último momento. A lo largo de 1988 y 1989 cuajaron dos alternativas de alcance federal. La más centralista respondía al fracaso de la autogestión y la autonomía. Era simplista pero no le faltaba lógica y no necesariamente desembocaba en el totalitarismo: aún ahora en Belgrado subsiste un pluralismo cultural y religioso y una libertad de ideas y prensa superiores a los de Zagreb y Ljubljana. Sin embargo, el plan tenía la enorme desventaja de proceder íntegramente de Serbia. Su aceptación por las repúblicas implicaba el humillante reconocimiento de que no se hacían distinciones en el fracaso y no se daba una segunda oportunidad a nadie, excepto a la capital: todas las variedades locales de la autogestión habían sido un fracaso.

Por otro lado, el carácter denigrante de esta solución venía reforzado por su misma cabeza visible, que era

Slobodan Milosevic. Líder de la línea dura del comunismo serbio, «Slobo» (como se le conoce popularmente) se vio atrapado en su propio juego. Para llevar a cabo su modelo centralizador primero tenía que levantar la popularidad de la Liga en la misma Serbia, pero en ese caso ya no servían los viejos argumentos titistas. Por tanto, comenzó a recurrir sistemáticamente al nacionalismo serbio, lo que obligaba a un esfuerzo aún mayor para convencer a las otras repúblicas. En realidad, Milosevic es un político lo suficientemente primitivo como para que cualquier otro hubiera podido sustituirle con similares resultados. Aunque no le hace ningún asco a su papel, el radicalismo nacionalista de su mensaje es, sencillamente, el que muchos serbios quieren oír.

Ahora bien, dado que el viejo «modelo autogestionario» se había definido como una especie de tercera vía entre capitalismo y socialismo, se podría intentar potenciar cada vez más el primer ingrediente. Dicho de otro modo, el salto hacia la economía de mercado a partir de las estructuras previamente existentes podía ser una solución. Esa era la segunda alternativa, y el autor del intento más consecuente desde comienzos de 1989 fue el primer ministro federal Ante Markovic. Su pasado como director, durante más de veinte años, de la empresa Rade Koncar —faro de la industria croata— era un serio credencial de eficacia. Además, había sido primer ministro del Gobierno croata, y luego presidente de esta república. Pero, para su desolación, los restos del «modelo autogestionario» resultaron ser como una especie de maldición de Tito desde la tumba.

En principio, los problemas para privatizar eran los mismos que en Polonia, Hungría o cualquier otro Estado: encontrar compradores con el capital suficiente para ir adquiriendo la infraestructura económica estatizada. Pero además en Yugoslavia se añadía una dificultad autóctona, pues la ley sobre el trabajo asociado de 1976 se oponía explícitamente a toda interpretación de la propiedad social como propiedad del Estado, o del grupo que la gestionaba. Un verdadero detritus jurídico del «modelo económico yugoslavo» elaborado sobre la marcha, primero por oposición a las primeras etapas stalinistas del titismo económico y luego para evitar un viraje excesivo a la economía de mercado, como amenazó con ocurrir en 1965 y 1971. Así, la propiedad social en Yugoslavia era de todos y de ninguno, y el problema es tan intrincado que ni la ley sobre las empresas de 1988 lo ha modificado sustancialmente. Además, la lógica desconfianza del capital extranjero, la inexistencia de un marco jurídico estabilizado y la debilidad del Estado han frenado enormemente la privatización: en agosto de 1990 el sector privado agrupaba a 206.000 asalariados, contra los 6,4 millones del socializado, en continuo deterioro (Sa-

mary, 1991). Por si fuera poco, el proyecto de Markovic implicaba la imposición de un mercado único y de un poder federal que centralizara la política monetaria, la fiscalidad, el sistema de precios o la devolución de la deuda. Todo ello chocaba cada vez más con las compartimentaciones que se habían generado en las repúblicas, y dentro de ellas, en las que se entremezclaban prerrogativas económicas y también políticas.

Junto a esos intentos de recrear alguna forma de macromodelo federal, se había ido asentando en cada una de las repúblicas la posibilidad de recurrir al micro-modelo. Este proyecto crecía sobre una mutua acusación clásica de los estados autonómicos o federales en momentos de crisis: las zonas más ricas no desean que sus beneficios fluyan hacia las más pobres, y éstas arguyen que la explotación de que han sido objeto ha servido para favorecer el desarrollo de las otras sin obtener gran cosa a cambio. Ahora cabía pensar en una gestión realmente autónoma en el marco de una estructura confederal de repúblicas soberanas, o incluso totalmente independientes. En teoría, enderezar la economía de una región sería más sencillo que conjugar soluciones para un macromodelo federal, que además ya había fracasado. Además, los nuevos aparatos estatales que resultarían implicaban una atractiva promesa de empleo y poder para los connacionales. El problema era poner a todos esos micromodelos de acuerdo, dado que sus economías eran muy interdependientes.

El poco tiempo que quedaba para llegar a un acuerdo aún se acortó más durante los últimos meses de 1989. El desmoronamiento de todo el bloque oriental desencadenó enormes expectativas, tan frenéticas como ingenuas. En el breve plazo de medio año, la parrilla de salida hacia la integración en el modelo capitalista occidental se había complicado enormemente. Durante un tiempo, Yugoslavia había figurado en las primeras posiciones de la cola de países que esperaban algún tipo de colaboración especial, a las puertas de la Comunidad Económica Europea. Ahora, la República Democrática Alemana tomaba la delantera, y ya nadie podía asegurar nada. Una corriente de histeria recorrió las repúblicas más desarrolladas de Yugoslavia. Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia eran unos lastres intolerables. No era un mero problema de desarrollo económico coyuntural: su «orientalidad» los hacía profundamente irrecuperables.

Enero de 1990 trajo el reventón final de la LCY durante su XIV Congreso. El borrador presentado a debate era un buen síntoma de los últimos momentos de irrealidad en los que vivían inmersos los comunistas yugoslavos. Habría de proclamarse el fin del autoritarismo socialista, instituyéndose un poder judicial independiente, una economía mixta, plena propiedad privada y participación completa en el proceso europeo de

integración. Y terminaba: «Mañana puede ser demasiado tarde para el socialismo en Yugoslavia». Ya era demasiado tarde. El mar de propuestas y enmiendas resultaba imposible de ordenar; el debate pronto degeneró en insultos entre las delegaciones serbia y eslovena y ésta terminó retirándose en bloque. Así, el congreso fue aplazado sólo tres días después de su inauguración. Ni dos meses más tarde hubo manera de concluirlo. Había saltado el penúltimo cerrojo de la estructura federal heredada de Tito. Ya sólo quedaba el Ejército.

A lo largo del año proliferaron los partidos políticos que constituyeron gobiernos y parlamentos en las asambleas regionales. Dado que nadie había dado con una solución eficaz a los problemas socioeconómicos de la nueva Federación, el vacío fue llenado con nacionalismo a granel o con variantes socialistas más o menos heredadas del régimen anterior. Rápidamente se dibujó una línea divisoria que coincidía con la vieja frontera militar entre los imperios otomano y austrohúngaro. Allí donde antes de la guerra apenas había existido una estructura de clases medias bien consolidadas, la segunda opción siguió teniendo validez, como había pasado en Rumania, Bulgaria o Albania tras la caída de los regímenes marxistas. En regiones con una tradición de sociedades más estructuradas los años de marxismo no se veían como un período de mejoras, y la ruptura fue total.

Pero en realidad se había producido un enorme vacío en toda Yugoslavia, provocado por el hundimiento de un proyecto que durante más de cuarenta años había dado un sentido profundo a todo el conjunto. Ciertamente, el «modelo yugoslavo» había sido demasiado mitificado por quienes lo construyeron y lo vivieron. Pero no por ello les parecía menos real, sobre todo en contraste con la realidad presente: la Yugoslavia audaz y vanguardista de los años sesenta, que se erigió en líder del movimiento de no alineados y se proyectó más allá de sus atormentadas fronteras, vuelve a encarnar la quintaesencia de las impotencias bálticas, a las que añade el nuevo síndrome de la libanización. Quedan muy lejanos los años del cosmopolitismo en que los turistas soviéticos quedaban embobados ante las tiendas Yugoexport, Fontana o Anfora del centro de Belgrado, o las peleterías y joyerías de Zagreb.

De todas formas, la potencia del mito era tan grande que las últimas reservas de «yugoslavismo» se estiraron hasta el último momento a lo largo de los meses más críticos de 1991. En marzo, Stipe Mesic aún declaraba a la prensa que la situación en Yugoslavia no era tan mala como para justificar la intervención del Ejército. En mayo, antesala de los combates abiertos que estallarían un mes más tarde, Ante Markovic quitaba hierro a la situación en sus declaraciones públicas. Básicamente,

opinaba, la secesión total de las repúblicas sería más antieconómica que la reforma del conjunto federal. Además, los dirigentes de las repúblicas se lo pensarían mucho antes de responsabilizarse totalmente de una independencia que no terminaría con los problemas económicos y haría recaer las críticas sobre ellos mismos. Incluso el presidente croata Ante Marković, mucho más pesimista, pensaba, antes del referéndum del día 19, que el Ejército difícilmente se atrevería a una intervención total. Además, el pleno acceso de Mesic al liderazgo de la Presidencia colectiva, con la solución de la crisis constitucional que significaba el bloqueo que le oponían los representantes serbios, reduciría sensiblemente el peligro de un estallido de la federación. A pesar de las actitudes pro serbias, oficialmente el Ejército fue la institución que más tiempo mantuvo la tradición federalista: sólo renunció a ella el 23 de octubre, tras cuatro meses de combates.

En cualquier caso, la irrealidad de las nuevas alternativas es directamente proporcional a la desaparición de los últimos vestigios del «modelo yugoslavo». En realidad la última gran paradoja es la extraña guerra «gradual» que estalló el 26 de junio pasado. En cierta manera es un intento por «matar» al viejo modelo y por lo tanto termina en una cierta paradoja: posee en sí misma un último significado unificador de los yugoslavos, tanto más cuanto que los objetivos de los diversos bandos y de los que se mantienen al margen son de lo más variado, lo que les priva de claridad. En realidad, como ocurrió en España entre 1936 y 1939 o en el Líbano durante la última década y media, la misma contienda esconde numerosas guerras, y cada vez es más difícil identificar proyectos comunes. De hecho, ya ni siquiera se encuentran claras motivaciones ideológicas. También está bastante claro que los dirigentes cada vez controlan menos la situación.

En el bando serbio, ni Milosevic dirige realmente todas las fuerzas en presencia, ni todos los oficiales obedecen de igual manera a sus altos mandos, ni existe una coordinación real entre los irregulares serbios que luchan en Croacia. No se terminan de entender muy bien los objetivos de esa especie de minigobierno militar instalado en Cavtat, en la vecindad de Dubrovnik, ni los beneficios que obtendría el Ejército con la destrucción de esa ciudad, más allá del mero ejercicio del terror, que los croatas contestan ahora con el bombardeo de localidades serbias en la Voivodina. Pero sobre todo, las Fuerzas Armadas federales desarrollan una estrategia totalmente vacilante que no le beneficia en nada. En Belgrado, el ultranacionalista Vuk Draskovic invita a los jóvenes a desertar, y como respuesta el alto mando pone en práctica en algunas zonas una movilización selectiva con criterios políticos. En el frente, nadie sabe todavía quién mató al líder de la Guardia

Nacional Serbia, Djordje Bozovic, alias «comandante Giska», pero parece que fue víctima de la enemistad que le profesaban, en su mismo bando, los mandos militares y los guerrilleros radicales «chetniks».

En el lado croata, la difícil situación militar une más a todos, pero también existen serias divisorias. La oposición política crítica a Tudjman, la Guardia Nacional Croata censura a los políticos de Zagreb pero es despreciada por las formaciones paramilitares del Partido del Derecho Croata, lideradas por Dobroslav Paraga. Y para rematar el conjunto, las relaciones entre Eslovenia y Croacia empeoran, especialmente a raíz de que la primera república ha seguido adelante con sus objetivos sin contar con la otra. Los resultados negativos y desconcertantes son numerosos. Un ejemplo: los nuevos tólares eslovenos han desplazado a los dinares en esa república, que ahora fluyen hacia Croacia incrementando su inflación. Pero sobre todo, Ljubljana está aplicando una férrea política de aislamiento con respecto a su vecina apoyada por Austria e Italia, que quieren convertirla en un compartimiento estanco con respecto a la guerra que se vive más al sur (Janigro, 1991). De momento, el resultado es un callejón sin salida, pues si se reconoce la independencia de Eslovenia también habría que hacerlo con Croacia. Esa salida —propugnada por la diplomacia austrogermana—, sin haberse llegado a una solución pacífica de los litigios, sólo serviría para que las partes implicadas se rearmaran aún más aceleradamente, y sin límite, en el mercado internacional. Ello comportaría un riesgo claro de que se intensificara el alcance del conflicto.

La lista de las motivaciones para empuñar las armas es interminable. El paro generado por el desastre económico ha suministrado una riada de combatientes, que además encuentran sus motivaciones en odios locales, de un pueblo hacia el vecino. A falta de algo mejor, también las viejas imágenes tienen su lugar. No se puede ignorar que de las poblaciones serbias en Croacia, integrantes de la vieja frontera militar que separaba al Imperio austrohúngaro del otomano, surgieron los colonos-soldados más fieles al emperador. Durante la Segunda Guerra Mundial, también las primeras formaciones partisanas de Tito tuvieron su origen en esa zona. Cincuenta años más tarde, los mismos campesinos pobres de Krajina se han vuelto a rebelar contra el separatismo croata, y con sus monos de trabajo y gorras obreras por todo uniforme, buscan recordar a los guerrilleros comunistas que eran sus padres.² Los croatas y

2. Vid.: Francisco Veiga y Enrique Ucelay-Da Cal, «Partidarios de la Gran Frontera», *El País*, 4.IX.1991, p. 4; «La tenaza serbia», *El Observador*, 10.IX.1991, p. 20.

serbios que han regresado del extranjero, los mercenarios, aventureros y fascistas que han acudido a Yugoslavia aportan su visión estereotipada de la realidad, sus propias motivaciones, variedades de odio.

En pocos meses los objetivos de unos y otros se han deslizado hacia el pasado más remoto como síntoma de la creciente falta de imaginación para salir de la creciente libanización de la guerra. Sólo por poner un ejemplo, Vojeslav Seselj, el líder del Partido Radical Serbio y de las formaciones paramilitares «chetnik», ha propuesto ceder a Italia parte de la costa dálmata. Con tales argumentos, Seselj no hace sino resucitar las ideas de Pasic, el primer ministro serbio durante la Primera Guerra Mundial. A éste no le importaba renunciar a un proyecto de federación entre los eslavos del sur, abandonando a los católicos eslovenos y croatas, a cambio de un homogéneo Estado panserbio de población ortodoxa. Por lo tanto, Seselj busca resucitar íntegramente el Tratado de Londres de 1915, «único documento internacional sobre las fronteras de Serbia». No parece tener en cuenta que la Gran Guerra tuvo lugar hace tres cuartos de siglo y que no parece probable que Roma se sienta ya interesada en anexionarse el botín propuesto por el ultraderechista serbio. También resulta pintoresca la consideración de que una hipotética Croacia plenamente independiente e internacionalmente reconocida como tal, podría ser considerada sucesor jurídico (que no ideológico) del Estado «ustachi» de la Segunda Guerra Mundial, y como tal obligada a pagar reparaciones de guerra a los serbios, judíos y gitanos víctimas de los genocidios de entonces. En efecto, después de la Alemania nazi, la Croacia «ustachi» fue la segunda potencia europea del Eje en cuanto a volumen de crímenes de guerra.

Pero sobre todo el proyecto más irreal es el de crear unas repúblicas independientes cargadas de minorías nacionales. A no ser que se recurra al genocidio sistemático o la deportación masiva de tales poblaciones, cosa que de momento parece improbable, será imposible conseguir su «homogeneización». Por lo tanto, los hipotéticos Estados bosnio-herzegovino, croata, macedonio o panserbio no serían ni más ni menos que la reproducción de «pequeñas Yugoslavias». ¿Tienen sentido tales proyectos cuando no se lograron superar las contradicciones nacionales a escala del antiguo Estado federal yugoslavo?

Aparentemente, el intento de Eslovenia es el único viable, pero no por ello está exento de zonas oscuras. No han faltado acusaciones de que la violenta ruptura del pasado mes de julio fue producto de una operación cuidadosamente calculada: generar un conflicto-relámpago para recabar la atención internacional y operar así seriamente al reconocimiento diplomático que la Comunidad Europea y los norteamericanos rechazaban

conceder. El alma de esta dramatización calculada habrían sido los ministros de Defensa e Interior, Ivan «Janez» Jansa e Igor Bavcar (Mayer, 1991). Este último, hace tan sólo seis años, era un editor de extrema izquierda que se dedicaba a publicar en Eslovenia los textos de las Brigadas Rojas italianas y los escritos de Toni Negri. Tanto la forma en que organizó las manifestaciones populares de mayo de 1989 como, sobre todo, la hipotética crisis calculada de fines de junio recuerdan las técnicas de movilización popular ideadas por Negri para el movimiento de los «autónomos» italianos del «núcleo del Véneto».

Sobre estas sospechas, que no niegan validez al éxito del límpido proceso esloveno hacia la independencia, no se puede negar la creciente implicación austrogermana en la zona. Junto a la insistencia de Alois Mock, ministro de Asuntos Exteriores del Ejecutivo vienés, en el reconocimiento de la independencia de Croacia y Eslovenia por parte de la Comunidad Europea, están los rumores de que oficiales de la Defensa Territorial de esa última república recibieron instrucción en Alemania o Austria. Desde luego, parte de su armamento más efectivo es de fabricación germana. Los gobernadores de las provincias austríacas de Estiria y Carintia estuvieron presentes como invitados oficiales en las celebraciones de la proclamación de independencia en Ljubljana, y la Televisión Austríaca emitió un programa informativo en esloveno tan pronto como los aviones de la Fuerza Aérea federal dejaron inoperante la radiotelevisión de la república secesionista el 2 de agosto (Moore, 1991). Con posterioridad, Alemania y Austria han restablecido los créditos de exportación a Croacia y Eslovenia, y 150 empresas (entre ellas nombres como Bayer, Hoechst, Siemens y AEG) han invertido en la segunda de las dos repúblicas, mientras que Viena estudia la petición de un crédito de 150 millones de dólares por parte de Ljubljana en agosto. La posibilidad de que Eslovenia termine convirtiéndose en parte del «hinterland» económico austrogermano es cada vez más palpable.

El extremo no deseable sería que esa dependencia llegara demasiado lejos, y que la nueva república, consumada completamente su independencia, terminara convirtiéndose en la plataforma exterior duplicadora de las actividades que la industria y las finanzas austríacas no pueden llevar a cabo en su propio país. Al fin y al cabo, si uno de los grandes problemas de la reprivatización en los antiguos países socialistas consiste en buscar compradores para las fábricas y negocios del Estado, la respuesta más sencilla pero peligrosa se halla en el capital extranjero. Desde ese punto de vista, el capital austrogermano tiene a su disposición una verdadera ganga: la compra a precios de saldo de la mejor infraestructura económica, servida por la mano de obra

más competente, de una república que en su día fue la flor y nata de la descompuesta Yugoslavia.

Conclusión

Existe un cierto riesgo de que la penetración austro-germana con fuerza en el ámbito adriático termine por provocar fricciones apreciables con los intereses italianos. Más probable todavía es la posibilidad de que búlgaros y albaneses se mezclen en el conflicto yugoslavo a partir de sus ambiciones en Macedonia y Kosovo respectivamente. La regionalización de todo el conflicto a escala balcánica generaría una muy peligrosa escalada de la tensión a nivel europeo. Si Sofía y Tirana han decidido no lanzarse a la aventura es en parte porque tienen demasiada necesidad de ayuda occidental como para permitirse el lujo de desafiar sus presiones.

Pero además, al menos en Bulgaria, no existe esa especie de profunda frustración colectiva, impulsora de extremismos, que se percibe en Rumania y Yugoslavia. Aquí es como si se estuviera viviendo un síndrome específico generado por aquellos regímenes que enarbolaban exitosos modelos de sociedad, de economía o de política exterior, que posteriormente cayeron en el descrédito y el fracaso. Cuanto más célebre y ambicioso fue el proyecto, mayor ha sido la turbación que ha acompañado a su caída. Rumania es un buen ejemplo de ello. La política de calculada autonomía del bloque comunista impulsada por Ceausescu lanzó a Rumania por los foros internacionales como mediadora de conflictos y asesora de países no alineados. Las audacias de los acuerdos económicos llevaron a la industria y el comercio a recónditos mercados de Asia y África. En cierta manera, la desfavorable situación geoestratégica de una Rumania metida en un «cul de sac» impulsó un sobreesfuerzo que terminó por desembocar en objetivos irreales y en proyectos antieconómicos. Pero nunca antes se había llegado tan lejos. Ahora es el momento del realismo más descarnado, y el país vive en una especie de inercia soporífera, como si costara aceptar que todo un proyecto de varias décadas no tiene ya ningún valor y se debe comenzar de cero.

Como contraste, Bulgaria parece estar encontrando con mayor facilidad el camino de la readaptación. Durante los años de régimen comunista fue la «frontera sur» del bloque. Tenía una misión clara y limitada dentro del conjunto que coincidía con la histórica defensa de los límites patrios contra turcos y griegos. Pero a la vez las fronteras son zonas de contacto y, en tal sentido, el camino hacia la economía de mercado se nutre de la facilidad de intercambios económicos con los viejos enemigos colindantes. Aún es pronto para

decirlo, pero algo similar puede ocurrir en Albania cuya transición es en apariencia más similar a la rumana que a la búlgara. Sin embargo, el antiguo régimen imperante en Tirana, totalmente cerrado en sí mismo, no tenía que ver tanto con la búsqueda de un modelo original e ideal como con un intento de prevenir que una abierta identificación con la ortodoxia de Moscú no fuera a generar una agresión del vecino yugoslavo. En cualquier caso, es previsible que la renovación venga de una apertura total al exterior. De la misma manera que Eslovenia puede convertirse en una «marca» económica de Austria, Albania quizá termine siendo la base aero-naval de alguna potencia occidental.

Yugoslavia es, en cualquier caso, el ejemplo más dramático del síndrome negativo que puede generar un gran proyecto colectivo devenido totalmente obsoleto. Pero sus consecuencias son muy paradójicas. Porque si el fracaso del «modelo yugoslavo» ha generado tal desolación no es porque el Estado haya sido un fracaso desde sus comienzos hasta los combates de este invierno. Al contrario, lo que en el fondo está provocando los odios implacables de esta guerra sin objetivos globales es el despecho del fracaso, siempre atribuible al otro. Yugoslavia fue posible y en modo alguno puede considerarse como un «invento» de la diplomacia aliada en las conversaciones para el Tratado de Versalles, tras el final de la Primera Guerra Mundial. Menos todavía, como afirma el periodista e historiador Paul Johnson,³ fue un «parto intelectual» del profesor universitario inglés R.W. Seton-Watson. Hace falta forzar mucho la historia real de los eslavos del sur para «olvidar» figuras de la importancia de Ljudevit Gaj (1809-1872) o el obispo Strossmayer de Djakovic (1815-1905), ambos croatas, que lucharon incansablemente por lo que en el siglo XIX era todavía el sueño de Yugoslavia. Antes de Versalles tuvo lugar el pacto de Corfú en 1917. También es anterior el «Narodno Vijecé» o Junta Nacional en Zagreb, que en octubre de 1918, con el Imperio Austrohúngaro en plena descomposición, expresó su deseo de unirse a Serbia y Montenegro.

Con todos sus problemas a cuestas, existió una Yugoslavia plenamente viable. ¿Puede volver a resurgir? La respuesta es hoy totalmente incierta. Pero las acumulaciones de odio son meras patologías históricas que no necesariamente resultan ser indicativas de diferencias reales de tipo nacional, interclasista o ideológico. Buena muestra de ello es el Líbano, un Estado también

3. Paul Johnson, «Nacido de la profeta británica», *La Vanguardia*, 9 de mayo de 1991, p. 21. Xavier Batalla asumió estas hipótesis, dándole un sentido aún más burdo en: «El modelo yugoslavo de desunión», *La Vanguardia*, «Revista», 29 de septiembre de 1991, p. 6.

surgido de la Gran Guerra, que tras sufrir una guerra civil de dieciséis años de duración no se ha desintegrado como entidad estatal. Ciertamente es que las tropas sirias de interposición casi han aglutinado el país a los designios de Damasco, pero los actores de la guerra han vuelto a convivir en las mismas fronteras de antes. Quizá lo que les separaba no era tan real.⁴ En cualquier caso, la lección podría ser que muchas veces la única solución a un problema complicado es la vieja.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BARTON, A.H.; DENITCH, B., KADUSHIN, Ch. (eds.), (1973). *Opinion-making Elites in Yugoslavia*, New York, Praeger.
- BISHOP, R., CRAYFIELD, E.S., (1949) *Russia Astride the Balkans*, London, Evans Brother London; New York, Robert M. McBride.
- BOLL, M.M., (1984). *The Cold War in the Balkans. American Foreign Policy and the Emergence of Communist Bulgaria. 1943-1947*, Lexington, Kentucky, Kentucky University Press.
- COLE, J. W. (1981), «Family, Farm, and Factory: Rural Workers in Contemporary Romania», en: Daniel N. NELSON, *Romania in the 1980s*, Boulder, Colorado, Westview Press; pp. 71-116.
- FABER, B.L. (ed.) (1976), *The Social Structure of Eastern Europe: Transition and Process in Czechoslovakia, Hungary, Poland, Rumania and Yugoslavia*, New York, Praeger.
- FARKAS, R.P. (1975) *Yugoslav Economic Development and Political Change: the Relationship between Economic Managers and Policy-making Elites*, New York, Praeger.
- GRESH, A. (1991) «Les incertitudes de la voie bulgare», *Le Monde Diplomatique*, 451, Octubre: 8-9.
- HACKETT, J., (1978) *The Third World War. A Future History*, London, Sidgwick & Jackson.
- JANIGRO, Nicole, (1991), «Slovenia, talleri e caos», *Il Manifesto*, 18 ottobre: 2.
- LENDVAI, P. (1970) *Eagles in Cobwebs: Nationalism and Communism in the Balkans*. London, MacDonald; Garden City, New York, Anchor Books.
- MAYER, M., (1991), «Europe's Would-Be Nation», *Newsweek*, July 22:20-21.
- MOORE, P., (1991), «War Comes to the Airwaves», *Report on Eastern Europe*, RFE/RL Research Institute, 39 (September 27): 34-37.
- OLESZCZUK, T., (1980), «Convergence and Counteraction: Yugoslavia's Anti-technocratic Campaign and Electoral Results, 1957-1974», *Comparative Political Studies*, 13, nr. 2 (July): 205-233.
- SAMARY, C., (1989), *Le Marché contre l'autogestion. L'expérience yougoslave*, Paris: Publisud-La Brèche.
- SAMARY, C., (1991), «La Yougoslavie à l'épreuve du libéralisme réellement existant», *Le Monde Diplomatique*, 446, Juillet: 4-5.
- SINCLAIR, P.R. (1982), «Towards a Class Analysis of Contemporary Socialist Agriculture: Bulgaria in the Seventies», *Sociologia Ruralis*, 22: 122-139.
- STURDZA, M., (1970) *El suicidio de Europa*. Barcelona, Luis de Caralt.
- TERTSCH, H., (1990) «Rumania y Bulgaria se rebelan contra el futuro», *El País*, 27 de junio: 4.
- TERTSCH, H., (1991) «Rumania, el primer golpe fructífero en el Este», *El País*, 30 de septiembre: 4.
- VUSKOVIC, B., (1976) «Social Inequality in Yugoslavia», *New Left Review*, nr. 95: 24-44.

4. Francisco Veiga y Enrique Ucelay-Da Cal, «La libanización de Yugoslavia», *El País*, 26.IX.1991, p. 8.